

Comas
S.A.

tiene el placer de informarle

que acaba de recibir

las últimas creaciones

nacionales y extranjeras

para primavera y verano

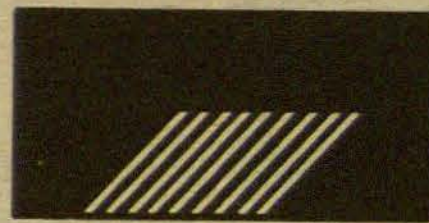
en Sastrería, Camisería y Zapatería

Paseo de Gracia, 2

Ronda San Pedro, 1

Parking en SABA y Garage NOVEDADES

VISTA JOVEN CON PERSONALIDAD



J. Vidal Beneyto

Los grupos de presión, la naranja y el poder

La reflexión sobre y la práctica de la realidad político-económica norteamericana —sus tensiones, sus conflictos, sus mecanismos operativos, sus disfunciones, su ambigua eficacia—, vivida además en un año electoral, me han ayudado a situar «el problema de la naranja» en una perspectiva distinta, y pienso que bastante esclarecedora, que quizá merezca ser comunicada y sometida a contraste ajeno.

Lo que llamamos la crisis de la citricultura española no me parece que sea sólo, ni siquiera principalmente, el proceso de degradación, o al menos de esclerosis, de unos sistemas de producción y de comercialización a los que nos aferramos tan necia e inútilmente; ni la paulatina e inevitable sustitución de nuestra presencia en los mercados consumidores europeos por unos competidores más ágiles, más dinámicos y mejor organizados que nosotros, hecho explicable dada la supuestamente ingénita y progresiva ineptitud de los valencianos para las actividades agrícolas y comerciales: ni la ineluctable consecuencia de una inviable estructura de la propiedad agraria, del bajo nivel cualitativo y de la desconcertante pluralidad de variedades de agrios, producidas y exportadas, o de la anarquía comercializadora. La decadencia de la economía citrícola valenciana es la historia, lamentable y dramática, de una destrucción, de una ineficacia y de una incapacidad. La destrucción gradual, pero segura, de una notable fuente de riqueza, derivada de la ineficacia —¿indiferencia, impotencia, intereses contrarios?— de la Administración para encontrar soluciones políticas —medidas equilibradoras de la discriminación de que es objeto la naranja española en el Mercado Común— a problemas políticos —la imposibilidad para España de integrarse en la C.E.E.— y de la incapacidad política de un pueblo —el valenciano— para asumir colectivamente la defensa de sus intereses colectivos. Todo lo demás es anécdota.

A finales del año pasado, en un intercambio de artículos y cartas, del que fui parcial protagonista, que tuvo como plataforma la revista DESTINO, de Barcelona, y como contenido los avatares de la comercialización de los agrios, Joan Fuster, tras admirarse

de que no existiera en el país valenciano un grupo de presión citrícola, se dolía de su ausencia, y explicaba, en parte, por ella la dramática situación de nuestras naranjas. Que a la certera y bien informada sagacidad de nuestro maestro en valencianismo se le haya escapado que lo de los grupos de presión es una «maniobra metodológica» diversiva, encaminada a enmascarar el conflicto real entre las clases y las verdaderas relaciones de poder, prueba que la colonización científico-cultural norteamericana (aunque sea vía Francia y esa terrible servidumbre francofónica de tantos catalanes, ¡ay la vecindad!) señorea sin antagonista serio los modos y formas de la vida cultural española de hoy.

La categoría política «grupo de presión», de dudosa legitimidad teórica y de escasa utilidad funcional en su medio de origen —la comunidad anglosajona—, es absolutamente inutilizable en una sociedad como la nuestra, donde la exigua tradición del asociacionismo voluntario, la precaria existencia que la actual Ley de Asociaciones concede a estos entes sociales, y la falta de transparencia social de los comportamientos grupales, vienen a contradecir, frontalmente, los supuestos mismos de su aparición y funcionamiento. Por lo demás, y aunque sorprenda a Joan Fuster, en la más estricta perspectiva de la ciencia política norteamericana, ese grupo de presión existiría y estaría constituido a escala española por el Grupo de Agrios del Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas y a nivel de país valenciano por la Sección Económica del Sindicato Provincial de Frutos y por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Valencia, y hasta tendría, como cualquier grupo de presión que se precie, sus «lobbyists», que serían los hombres-puente y los hombres-influencia entre el Sindicato y el Ministerio de Comercio, a los que, por lo demás, no nos sería difícil ponerles, ahora, nombres y dos apellidos. Pero cuando venimos tan a lo concreto, advertimos en seguida que no es ahí donde duele, y que el destino del sector citrícola depende de otros factores, está en otras manos.

Un rápido inventario de omisiones y agresiones «oficiales» contra la naranja nos lleva a recordar la prohibición de plantar árboles que pesó

sobre nuestra agricultura desde los primeros años después de la guerra civil, cuando precisamente una rápida expansión de nuestros cultivos en aquella época hubiera podido servir para desalentar las posteriores plantaciones de agrios en países mediterráneos; nos sitúa en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, cuando los agrios soportaron, durante años y años, el peso de la balanza comercial española, financiaron, en medida importante, las compras exteriores de bienes de equipo y contribuyeron, casi decisivamente, a la reconstrucción económica de España, sin recibir apenas otra compensación sectorial y para el país valenciano, que la de obligar a los exportadores a renunciar a una parte sustancial del valor real de las divisas por ellos producidas o a convertirse en contrabandistas monetarios; nos hace pensar en el arancel a la exportación con el que por varios años se penalizó la venta de agrios al exterior; nos mueve a mencionar las tasas que hay que abonar por los servicios de inspección fitosanitaria y del Soivre que, evidentemente, deberían ser gratuitos; nos trae a la memoria la imposibilidad de conseguir ninguna ayuda estatal para la publicidad colectiva y genérica de la naranja española que tienen que soportar individualmente los profesionales del ramo, a pesar de la promesa pública del ministro de Comercio en Valencia hace más de un año; nos abruma con la conciencia del desasistimiento de los agrios españoles en el Mercado Común, etcétera. Y en estas últimas semanas, como coronamiento de la difícil situación por la que atraviesa nuestra economía agrumícola, el oscuro acuerdo con Marruecos autorizando el transporte terrestre por España de la naranja marroquí y, según personas autorizadas —vid. en el periódico «Levante» de 5 de enero de 1972, el artículo de don Luis Font de Mora, destacado ingeniero de la Delegación del Ministerio de Agricultura en Valencia—, la puesta en regadío de 360.000 hanegadas de tierra para agrios en el norte de Marruecos con financiación española.

¿Y cómo se explica esta triste situación de la naranja, entre el abandono y la agresión, cuando otros productos agrícolas —de índice técnico económico muy inferior— son objeto de atención permanente y de ayuda constante en España, o cuando la política comercial de los países productores es exactamente la contraria, promoviendo y apoyando por todos los medios la expansión de la exportación citricola? Seguramente no por la existencia o inexistencia de grupos de presión, y si abordamos el problema en términos de poder, que es una dimensión tan válida, al menos, como cualquier otra, habría que centrarlo más bien en torno a la clase dominante. Y preguntarse entonces: ¿Cuántos hombres tiene la naranja entre los miembros de la clase dominante española? O dicho de otra forma: ¿Para cuántos miembros de la clase dominante española tienen los problemas de la naranja un interés vital, decisivo? A ambas interrogaciones habría que contestar con una misma palabra: ninguno. Así puede darse la contradicción pública, escrita y reiterada entre dos ministros del Gobierno a propósito del acuerdo para el tránsito de las naranjas marroquíes por España: telegrafando, por una parte, que no se había suscrito ningún convenio a dicho respecto y que era tema en puro estudio; y asegurando, por otra, que se había firmado ya un protocolo, quedando tan sólo pendiente de discusión las modalidades aplicativas. ¿Es pensable una actuación de esta naturaleza en asunto que afectase sustancialmente los intereses, pongo por caso, de la industria eléctrica o de la banca española? ¿Cómo es posible que todavía no exista una explicación oficial que comprometa formalmente al Gobierno, diciéndonos si efectivamente existe tal acuerdo, cuándo se firmó, y, si no es demasiado preguntar, cuáles fueron las razones y quiénes los beneficiarios?

A esta falta de representantes en la clase dominante habría que imputar también las veleidades intervencionistas de la Administración en la economía naranjera, veleidades tan persistentes como inefectivas, y difícilmente conciliables con las pautas de liberalización económica prevalentes en España en los últimos quince años y con la conducta en otros sectores económicos, por ejemplo, los grandes grupos de capital. Lo agradecido y simple del tema ha llevado a muchos a tomar vela en el entierro de la naranja de tal forma que hasta los periódicos de Madrid echan de vez en cuando su cuarto a espadas, proponiendo fórmulas y remedios originales y maravillosos, por ejemplo «perfeccionar los sistemas comerciales» (vid. artículo-editorial de «Pueblo», 16 octubre 1967, sin firma y bajo el epigrafe «Huer-tas 73»).

Sin duda alguna es también ese desvaímiento de la naranja frente al poder real el responsable del patente trato de desfavor a que la RENFE somete el transporte de agrios por ferrocarril, con ocasión de su último aumento de tarifas, que para ellos es del 12%, mientras que para muchas otras mercancías no supera el 8%. ¡Cuando en todos los países el transporte de productos agrícolas con destino a la exportación disfruta de tantas y tantas ventajas!

¿Pero cómo reaccionar frente a este proceder hecho de ataques y negligencias, cómo detener el desmantelamiento de la economía naranjera? A mi juicio, renunciando, en primer lugar, a los verbalismos milagreros, que ya no sirven ni como narcóticos de nuestra mala conciencia; y, en segundo término, planteando desde la base, con realismo y radicalidad, el problema y sus soluciones, y exigiéndolas, colectiva y solidariamente, hasta el final, pagando por ellas el precio que sea necesario.

Es completamente inútil, a no ser que creamos en el poder taumaturgico de las simples palabras, que nos pasemos la vida repitiendo que la solución a la crisis de la naranja española está en nuestra integración en el Mercado Común, pues es evidente, y, desde sus supuestos, de todo punto coherente, que no estamos dispuestos a dejar de ser lo que somos, ni por las naranjas ni por muchas otras cosas. Y sin esa transformación política no hay ingreso posible en la Comunidad Económica Europea. De igual manera, y por las mismas razones de fondo, es obvio que nuestra salvación no vendrá de las democracias populares, y que la URSS, que podría fácilmente comprarnos 200.000 toneladas de agrios no nos las va a comprar, a no ser que le ofrezcamos contrapartidas comerciales muy ventajosas, que no le queremos ofrecer.

Pero se pueden hacer muchas cosas. (Por ejemplo: Acabar con la discriminación de la naranja dentro de nuestras fronteras; garantizar al productor, al igual que sucede desde hace años con otros cultivos, un precio, digno y razonablemente remunerador, por kilo de mercancía cosechada —y no el simulacro a que se ha entregado el FORPPA durante las dos últimas campañas—; actuar en algunas de nuestras compras exteriores o en la firma de determinados acuerdos comerciales desde la perspectiva negociadora de la venta de nuestras naranjas; impulsar y ayudar a los agricultores en la organización de unidades mínimas de cultivo mediante la producción cooperativa y asociada; fomentar la transformación de variedades y la mejora de sus rendimientos; conceder a la exportación citricola las mismas ventajas de que goza en nuestros principales países competidores, etcétera). Y hay que conseguir que estas cosas se hagan. ¿Cómo? En Valencia, y en la naranja, entre los que la cultivan, la recolectan, la confectan, la transportan, la venden y los que trabajan en actividades conexas con las anteriores, pasan de 100.000 las personas que han apostado, irremediable y definitivamente, su vida al destino de los agrios. Y a 100.000 per-

sonas, que sólo reivindican la posibilidad de continuar viviendo en su tierra y de su trabajo, que sólo cuentan con su tenacidad y su esfuerzo, y que sólo piden igualdad de trato, no se les disuade con un discurso, ni se les adormece con palmaditas en la antesala de un despacho. Los viticultores del Rosellón, los remolacheros de Picardía, los campesinos de Bretaña, nos han mostrado cuáles son los únicos argumentos que cabe emplear cuando se trata de cuestiones de supervivencia. Por eso, después de la Zona Azul, del FORPPA y del Plan de Desarrollo, tal vez no nos quede más remedio que seguir imitando a nuestros vecinos e importar ese tipo de argumentos que han dado pruebas de su capacidad de convencimiento.

Austin (Texas)

La naranja española se encuentra en una triste situación entre el abandono y la agresión.

